

Documento para el Encuentro Nacional de GEN
5 de Septiembre de 2009

Marcos Novaro
Centro de Investigaciones Políticas (CIPOL)

1. Las elecciones del 28 de junio alteraron dramáticamente el escenario político nacional. La derrota del oficialismo fue inapelable. Sólo se impuso en provincias periféricas donde los Kirchner estuvieron completamente ausentes de la campaña; obtuvo bajísimos porcentajes en las principales ciudades del país y en las regiones más modernas, y fue derrotado en la batalla decisiva, la de la provincia de Buenos Aires (así como en distritos que consideraba baluartes, como Santa Cruz, Entre Ríos y Mendoza). El país le dio masivamente la espalda. Ello fue en parte un logro de las fuerzas de oposición, que aparecen sin embargo fragmentadas, con varias coaliciones en competencia entre sí, encabezadas por liderazgos emergentes aun no consolidados, que deben decidir todavía el curso que han de seguir de aquí en más; una oposición cuya agenda además parece limitada a la política negativa: se hace fuerte en el rechazo a iniciativas oficiales, no en proponer soluciones alternativas, que en muchos casos están ausentes, y en otros generan tensiones en su propio campo. Ello nos habla de una circunstancia que no debe pasarse por alto: el resultado fue sobre todo fruto de los garrafales errores cometidos por el propio oficialismo, y en particular del agotamiento de una política económica de corto vuelo, que fue acumulando crecientes tensiones y se revela inadecuada para enfrentar una situación internacional compleja. Por lo que no debe llamar la atención que, tras esos comicios, los datos más llamativos sean, de un lado, un cierto vacío político, que no está claro cómo se ha de llenar, y del otro, que el kirchnerismo pueda insistir en el curso que venía dando a sus políticas públicas y a su estrategia de confrontación.

2. Con el declive del kirchnerismo se abre una transición hacia un nuevo gobierno, el que habrá de asumir en 2011, que será casi inevitablemente de otra orientación política. Esta transición debe ser ocasión para recuperar algo de la calidad perdida por el sistema político y en particular por el sistema de partidos en los últimos años, y para corregir el rumbo en políticas públicas que se han revelado erradas y perjudiciales. Sin embargo las circunstancias no hacen las cosas sencillas a este respecto: existen serios obstáculos para la cooperación entre gobierno y oposición e incluso entre las fuerzas opositoras mismas. Recordemos que ya en el pasado la falta de cooperación entre partidos fue un factor desestabilizante de los procesos de transición, y que ello favoreció a las posiciones más irresponsables y todo tipo de conductas especulativas. El ejemplo más elocuente de ello lo brinda el fracaso de los acuerdos entre alfonsinistas y renovadores

en 1988, ante la competencia desleal del menemismo, y la consecuencia a la postre inevitable de ese fracaso, la hiperinflación. Si bien las condiciones económicas y fiscales actuales en el país no son tan dramáticas como entonces, una gestión irresponsable puede profundizar una crisis ya de por sí grave, y ello tener aun más serias consecuencias para el sistema institucional de las que hemos conocido hasta aquí: sin una revisión responsable de los subsidios y las tarifas de servicios públicos, y sin un control de las partidas de gastos con fines políticos y de la acumulación de medidas coyunturales que afectan el comercio internacional, puede producirse un agravamiento de la actual situación fiscal y económica, en el marco de una inflación creciente y de la persistencia de la fuga de capitales. La disposición de una porción considerable de los gobernadores y legisladores peronistas, e incluso de otros actores del campo político, a acompañar al Ejecutivo en iniciativas que postergan soluciones urgentes, o incluso agravan los conflictos (como ha sido el caso de continuidad de las facultades delegadas, y parece volverá a serlo la ley de radiodifusión, la suspensión de la ley de responsabilidad fiscal y el roll over de la deuda provincial y otros compromisos públicos) nos recuerda otra transición en que predominaron conductas coyunturalistas y se acumularon tensiones hasta que se volvieron explosivas: la que encabezó el menemismo en la segunda mitad de los años noventa, y selló en gran medida la suerte del gobierno de la Alianza. Los gobernadores peronistas actúan de este modo estimando que un deterioro de la situación macroeconómica y fiscal se cargará exclusivamente en la espalda de los Kirchner, y no en las propias, y en todo caso le tocará resolverla a quien suceda a los primeros en la Casa Rosada. También porque la concentración de recursos fiscales en el Ejecutivo nacional desalienta la búsqueda de un reequilibrio federal del proceso de toma de decisiones, cuyo desequilibrio por tanto se reproduce aunque carezca de respaldos políticos y legitimidad.

3. Lo que es seguro es que el kirchnerismo no hará una contribución positiva en este escenario de transición, al menos no lo hará por propia voluntad y mientras tenga, o crea tener, posibilidades para sobrevivir e incluso para recuperar algo del espacio perdido, a través del uso de los resortes de poder que retiene en sus manos, la polarización del campo político y la imposición de daños a quienes considera sus enemigos. Es así que, en su indetenible declive, el kirchnerismo deja plenamente en evidencia lo que lo ha caracterizado desde un comienzo: su comportamiento como una facción, indiferente a la convivencia que exige ser parte de una comunidad plural y democrática. Esta lógica facciosa predominó en la política argentina hasta 1983, la democracia argentina ha venido luchando por desterrarla, pero en los últimos años se ha querido rehabilitarla (afortunadamente sin éxito) en clave populista, contraponiendo al “gobierno nacional y popular” contra “enemigos del pueblo” que sería preciso desterrar para que éste logre sus fines, en una lógica amigo-enemigo que es útil a la búsqueda de culpables y no de soluciones. La lectura predominante en el Ejecutivo tras el 28 de junio es confirmatoria de estas premisas con que desde antes venía actuando: ante un peronismo “derechizado” y una oposición no peronista que también catalogan “de derecha”, los

Kirchner imaginan poder retener la representación de al menos un “tercio progresista”, es decir, ser la opción de izquierda en un eventual ballottage; “profundizar el modelo”, en ese contexto, aunque no les alcance para seguir en el poder, les serviría tal vez dividir al peronismo y retener algo de la representatividad que en su momento lograron. La alianza con sectores de la CGT, con los piqueteros e intelectuales más afines al populismo radicalizado, y la insistencia con iniciativas paradigmáticas de esta orientación, como las retenciones a las exportaciones agropecuarias, la ley de radiodifusión, la denuncia tan recurrente como hipócrita del FMI y de la especulación financiera, son una fiel expresión de esta postura. Estas políticas sin duda agravarán los problemas económicos que ya viene enfrentando el país desde antes de la crisis internacional: habrá más inflación, fuga de capitales y caída de la inversión, y por tanto crecimiento del desempleo y la pobreza. Pero negándose a realizar un ajuste de las cuentas y pateando hacia delante los problemas, el Ejecutivo podrá alegar que sigue fielmente en la defensa de las “políticas nacionales y populares” frente a opciones de “la derecha”, las de quienes ganaron las elecciones; y en la medida en que cuente con recursos fiscales de libre disponibilidad concentrados en sus manos, que aunque disminuidos por la crisis, debido a ella misma serán cada vez de mayor importancia para el resto de los actores institucionales, podrá seguir contando con aliados entre los gobernadores, intendentes y sindicalistas.

4. Con su triunfo el 28 de junio las fuerzas opositoras han abierto un escenario que les permitirá crecer, pero al mismo tiempo se enfrentan a crecientes dificultades para coordinar sus esfuerzos: en parte porque la competencia por posicionarse de cara al 2011 se vuelve más intensa, y en parte porque el oficialismo ha administrado (y puede preverse que seguirá administrando) hábilmente ofertas de negociación e indiferencia ante los reclamos que no está interesado en atender. Se sostiene que, luego del 10 de diciembre, habrá una nueva mayoría opositora en el Congreso, que podrá coordinar iniciativas, negociar e imponer condiciones al Ejecutivo. Pero tal vez las cosas no sean tan sencillas: no será fácil llegar a un acuerdo sobre las autoridades de las cámaras y la agenda parlamentaria, más teniendo en cuenta las crecientes tensiones existentes entre expresiones que compiten entre sí con tanto ahínco como lo hacen con el kirchnerismo. Algunos grupos opositores, sobre todo los de menor volumen, pueden verse atraídos por la experiencia de la centroizquierda populista, que ha logrado gravitación, al menos en la escena pública, como socia circunstancial de las posiciones oficiales. El camino más fácil que se le abriría entonces a la oposición, y en particular al Acuerdo Cívico y Social, ante este cuadro, sería responder a la inflexibilidad y las conductas facciosas del oficialismo con la máxima distancia y total prescindencia frente a las oportunidades para cooperar o negociar: negarse al diálogo y a asumir compromisos con otras fuerzas, preservarse y esperar para poder capitalizar el descontento social que resultará de una situación que tiene buenas chances de empeorar, tal vez sea la salida más fácil. Pero eso no significa que sea la correcta ni la más conveniente a largo plazo: volviendo a la experiencia de la transición de una década atrás, recordemos que la opción de la oposición al menemismo por “no hacer olas” y flotar hasta que el gobierno cayera en sus

manos dio rienda suelta a políticas coyunturalistas que volvieron cada vez más difícil aplicar correcciones, contribuyendo a atarle las manos en el momento en que le tocó enfrentar los problemas.

5. La cooperación y la responsabilidad institucional también pagan. Y en el largo plazo darán sus frutos. En un escenario dominado por la especulación y la incertidumbre el bien máspreciado es la confianza. Construir confianza es un desafío inescapable de toda fuerza política que aspire a un futuro distinto para la democracia argentina. Representa una opción estratégica frente al imperio de una lógica facciosa, que se presenta como revolucionaria pero es en verdad una combinación de descalificación pública y transacciones privadas, por tanto terriblemente estéril en términos de las reformas que es capaz de introducir, que descalifica a los adversarios dañando la convivencia y velando una distribución de concesiones y prebendas a esos mismos actores que desafía, o a otros equivalentes, con el objeto de volverlos socios dependientes, y no de hacerlos más democráticos, más respetuosos de la ley, ni más favorables a la redistribución social. Un reformismo democrático, progresista y modernizador debe partir de rechazar esos predicamentos redencionistas que acompañan la política facciosa, sea en los términos del populismo o del republicanismo, y formular un auténtico programa de cambio institucional, económico y cultural para el país, no como expresión de una autoproclamada superioridad moral, desde la que se pretenda sermonear y pontificar al resto de la sociedad política, sino de una construcción colectiva de consensos, a través del diálogo, la negociación y la cooperación entre actores heterogéneos, incluidos esos interlocutores en principio mal dispuestos para quienes siempre una buena batalla es mejor que un mal arreglo. Aun cuando no sea razonable tener muchas expectativas, y pueda ser complejo y hasta costoso asumirla, la disposición al diálogo debe ser una actitud permanente, pues surge del compromiso irrenunciable en la construcción de una nueva cultura política.

6. Ante la reluctancia del gobierno a ceder en nada existen dos alternativas, esperar a que “se consuma en su propia salsa”, para recoger los frutos de haber actuado como la oposición más intransigente, o recurrir a todos los instrumentos a la mano para reducir al máximo su capacidad de hacer daño, lo que significa no sólo esforzarse por lograr acuerdos con sectores opositores para frenar abusos de poder e iniciativas de tinte faccioso, sino también buscar entendimiento con actores del propio oficialismo que puedan estar abiertos a la cooperación aunque más no sea para hacer posible políticas anticrisis y un tránsito lo menos conflictivo posible hacia el 2011. Resolver este dilema es difícil para la oposición no peronista, pero lo es mucho más para los peronistas disidentes. Ellos, y el peronismo en general, tienen por delante un trámite por demás complicado: ¿cómo hacen para sostener un gobierno irresponsable e inflexible que se ejerce en su nombre, y a la vez evitar que cometa más errores, que dañarán seriamente sus posibilidades electorales en el futuro inmediato?, en otras palabras, ¿cómo se desembarazan del modo más incruento y menos costoso posible de los Kirchner? Los

desafíos de la oposición adquirirán, debido a ello, un cariz cada vez más divergente de aquí en más en el caso del peronismo disidente y en el del AcyS. El primero tiene por delante, ante la indisposición de los Kirchenr a ceder un ápice en sus orientaciones programáticas y su apuesta por la confrontación política y sectorial, el difícil desafío de optar entre permitir que los legisladores, gobernadores, intendentes y sindicalistas sigan prestando colaboración y sosteniendo al Ejecutivo, o forzar una ruptura en todas esas arenas en que todavía no se ha producido. Lo que bien puede traducirse como una opción entre mantener la ambigüedad y la indefinición de las lealtades, o arriesgarse a sumir al Ejecutivo en la total impotencia. El ACyS tiene en cambio las manos más libres para actuar. Sus dificultades proceden de lo rudimentario de otros recursos: principalmente, sus organizaciones y la capacidad de cooperación entre ellas. Con sólo proponer alternativas más o menos razonables a cada manotazo con que el gobierno pretende mostrarse combatiendo la crisis, podrá seguir ganando apoyos en la opinión y los grupos de interés. Pero le resultará más difícil lidiar con los permanentes recelos y disputas entre líderes y grupos, que se retroalimentan de un contexto dominado por el entusiasmo y el optimismo electoral: las conductas especulativas son a este respecto tanto el fruto de un éxito inesperado, y no en todos los casos merecido, como de un legado hecho de desconfianzas y recelos, que no es sólo fruto del kirchnerismo, aunque es por cierto bajo su influjo que él tomó el vuelo que en la actualidad tiene.

7. Los sectores progresistas o de centroizquierda también enfrentan circunstancias particularmente difíciles en este contexto. El abuso que ha practicado el kirchnerismo de sus ideas y banderas identitarias, y la fragmentación resultante de los esfuerzos realizados desde el poder por cooptar a sus dirigentes y fragmentar a sus organizaciones durante estos años son dos de los principales obstáculos que deberán superarse. La fragmentación en este sector del espectro político es particularmente marcada, y la desconfianza entre los distintos grupos una de sus causas más lamentables. Tanto en el campo comúnmente llamado “nacional y popular”, como en los sectores que podemos denominar socialdemócratas o liberales se corren serios riesgos de perder apoyos sociales trabajosamente conquistados, o quedar subsumidos en estrategias ajenas, sobre las que no puedan ejercer mayor influencia. Un diagnóstico preciso de las razones del fracaso del kirchnerismo y una rediscusión de las propuestas programáticas que desde el progresismo se pueden y deben ofrecer para los problemas del país serán dos instrumentos fundamentales para superar esta situación.

8. En términos programáticos una propuesta innovadora de corte progresista debe fundarse en tres instrumentos básicos: fortalecimiento de mercados competitivos en la economía local y de la inserción argentina en los mercados mundiales; reforma progresiva del sistema tributario para fundarlo en los impuestos a los ingresos y el patrimonio; y eficiencia asignativa del gasto público para fortalecer el federalismo, la redistribución del ingreso y la calidad de los servicios públicos esenciales. Cabe advertir que en cada uno de estos terrenos se puede llegar a acuerdos puntuales con sectores

políticos o grupos de interés. Pero también es preciso tener en cuenta que las reformas enumeradas se necesitan mutuamente: avanzar en cada una de ellas hará posible avanzar en el resto, y en cambio intentar aisladamente cada uno de estos cambios sería con facilidad bloqueado por los intereses contrapuestos. Por lo tanto, las posibilidades de formar coaliciones reformistas que lleven a cabo iniciativas en todos estos campos requiere de un gran esfuerzo de articulación, y de negociar con sectores políticos y grupos de interés muy diversos, pues sólo así se lograrán las mayorías amplias que se requieren. En suma, la complejidad de la tarea exige un proceso de construcción de consensos y arenas de negociación que insumirá necesariamente un tiempo prolongado. El declive del kirchnerismo puede convertirse en ocasión coyuntural para avanzar en este camino, pero no ofrece de por sí la solución, porque él dista de ser el único obstáculo a remover: pasar del centralismo discrecional de los recursos públicos a una distribución más respetuosa del federalismo y a la vez más eficaz para mejorar la calidad de los servicios públicos, a través de la introducción de incentivos a la eficiencia del gasto, mecanismos que estimulen la innovación y el esfuerzo, por ejemplo en la prestación de servicios de educación y salud, y en la transparencia de la asignación de asistencia social y la ejecución de la obra pública exigirá un gran esfuerzo reformista. Negociar la reducción de las retenciones a cambio de compromisos en el combate de la evasión de impuestos a las ganancias y el patrimonio puede ser también otra forma de superar las políticas kirchneristas en dirección a mayor calidad y redistribución, y evitar que su declive signifique simplemente la reinstauración de ya conocidas soluciones conservadoras.

9. La política de alianzas es, por lo dicho, un aspecto inescindible de la propia construcción partidaria. Para una política como la argentina, tradicionalmente facciosa, la competencia en la coyuntura es siempre el alfa y el omega de la acción, y sus necesidades se contraponen y priorizan a las de la cooperación: la lucha política es por lo tanto, frecuentemente un juego de suma cero, donde lo que yo gano se lo saco a otros, y viceversa. Avanzar hacia una cultura política más constructiva y auténticamente pluralista supone compatibilizar ambas lógicas, imaginar mecanismos para compartir los frutos del esfuerzo incluso entre competidores, convirtiéndolos de enemigos a combatir, en adversarios eventuales y socios posibles de emprendimientos compartidos. El GEN debe poder aportar a esta conversión cultural, tanto con las fuerzas progresistas o de centroizquierda en general, donde debe buscar sus aliados estratégicos, como con los actores democráticos y pluralistas, en donde podrá hallar necesarios aliados tácticos o socios incluso circunstanciales, por más alejados que ellos estén de las posiciones propias. Para ello es preciso identificar estos actores con los que es posible apenas sostener un diálogo, aquellos con los que se pueden alcanzar acuerdos concretos, y sobre todo con quienes es posible integrar una alianza duradera basada en amplias coincidencias programáticas. En este marco debe considerarse lo que aparece actualmente como el “renacimiento” de la UCR (efecto de su sobrevivencia al intento de fracturarlo y descomponerlo emprendido por el kirchnerismo), pues representa un

desafío para el GEN. Con el kirchnerismo ha fracasado un nuevo intento de refundar el sistema de partidos, a través de la alteración de sus clivajes tradicionales y la fractura y descomposición de los viejos partidos. La experiencia enseña que estas fuerzas políticas son capaces de sobrevivir a sus crisis, aunque progresivamente pierdan capacidad de representación y de innovación política. Por lo tanto, fuerzas nuevas son necesarias para el funcionamiento de la democracia argentina, aunque no sean por de pronto capaces por sí mismas de crear mayorías y gobernar. La clave está por tanto en la creación de coaliciones entre nuevos y viejos partidos: ello, en el caso concreto del GEN significa pasar de una etapa en que se consideraba heredero del radicalismo, a una en que pueda ser al mismo tiempo su aliado. Pasar de una etapa de crecimiento “fácil”, en que recogía adhesiones nacidas de la crisis y desprestigio de ese partido, a otra de construcción de largo aliento, en que sea capaz a la vez de afirmar una identidad nueva y tejer alianzas duraderas con la UCR así como con otros actores, es el desafío del momento. Le exige afirmar los principios que han dado origen al GEN y lo distinguen de la UCR, que le permitirán resistir cualquier intento de absorción, y fortalecer instrumentos electorales que demostraron ser hasta aquí muy eficaces para ganar consenso y confianza en la sociedad.

10. En este marco, contribuir a la institucionalización del Acuerdo Cívico y Social, es decir, a la fijación de reglas internas para la toma de decisiones, mecanismos que deben ser respetuosos de la autonomía de cada actor, y a la vez suficientemente legítimos y eficaces como para imponer conductas obligatorias, es una tarea fundamental. Los mecanismos a través de los cuales se elegirán los candidatos para las próximas elecciones serán de una enorme importancia a este respecto. Para encarar estas tareas, el GEN debe poder identificar de entre los actuales aliados y socios con que cuenta, aquellos con los que por sus posiciones programáticas, cultura política y modo de construcción, es posible alcanzar acuerdos más firmes y duraderos. Estos son, en primer lugar, los que comparten la tradición socialdemócrata y han demostrado mayor compromiso en la construcción de acuerdos y alternativas programáticas, no sólo salidas coyunturales y personalistas. La formación de una alianza estratégica con estas fuerzas, con vistas a crecer juntos, exigirá resolver al menos dos asuntos: un mecanismo para asignar posiciones en cada distrito, para negociar conjuntamente con otros actores; y un instrumento para tomar decisiones conjuntas en el Parlamento nacional. De concretar esta alianza, ella puede convertirse en núcleo convocante y articulador de un actor cada vez más amplio, representativo de las posiciones progresistas en el Acuerdo Cívico y Social, capaz de sumar a más y más actores hoy dispersos, incluso enfrentados entre sí.